JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés

Acción de Tutela No. 110014003061 2023 00 473 01

Resuelve el Juzgado la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido el 5 de octubre de 2023, por el Juzgado Sesenta y Uno (61) Civil Municipal de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por **Dayana Marley Peña Silva** como agente oficiosa de su hermano **Dabinson Andrés Sánchez Silva**, en contra de CAPITAL SALUD EPS-S y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. – DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE SALUD COLECTIVA – LABORATORIO DE SALUD PUBLICA- y a la cual fue vinculada la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud –ADRES- y Aunarsalud Servicios Integrales en Salud S.A.S.

1. ANTECEDENTES

1.1. Dayana Marley Peña Silva, presentó acción de tutela implorando la protección constitucional para su agenciado Dabinson Andrés Sánchez Silva, de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida. Solicitó que, tuteladas las aludidas garantías, se ordene a CAPITAL SALUD EPS suministre los medicamentos y el servicio médico solicitado.

1.2. Expuso como sustento de la acción que el agenciado fue diagnosticado con VIH y HEPATITIS C, motivo por el cual, su médico tratante adscrito a Aunarsalud Servicios Integrales en Salud S.A.S, le ordenó SOFOSBUVIR + VELPATASVIR (400/100 mg) x 84 DOSIS, los cuales ha solicitado desde el mes de marzo y la Clínica da respuesta de que ese medicamento está escaso en Colombia, y que, por tanto, debe esperar. Se necesita que se ordene a EPS la entrega del medicamento, y que la atención se presente de manera íntegra y oportuna.

1.3. Admitida la tutela y notificados los accionados y vinculados, las siguientes entidades se pronunciaron en los términos que obran en el expediente: ADRES, Secretaria de Salud de Bogotá, Capital Salud EPS-S, Ministerio de Salud, y Superintendencia Nacional de Salud, y los demás entes guardaron silencio.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado de primera instancia, tras contextualizar el panorama fáctico que plantea la presente acción de tutela, y determinar, con respaldo en las pruebas que el señor Sánchez Silva padece múltiples patologías como son VIH-HEPATITIS C, entre otras, calificadas como catastróficas o ruinosas, consideró que atendiendo a que se encontraba hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos, por su estado de salud no era adecuado ordenar la entrega del medicamento solicitado, hasta su egreso de esa área, para que nuevamente sea valorado por el médico tratante a fin de realizar una nueva reformulación, bien del mismo medicamento o de uno diferente.

Por lo anterior, consideró que no advertía probada “la pertinencia de lo que requiere el señor Dabinson Andrés, lo que conlleva en primer lugar a determinar que no se vislumbra una vulneración de los derechos fundamentales invocados...” dado que la EPS e IPS están brindando los servicios de salud que requiere el paciente, por lo que, no era viable ordenar un tratamiento específico, hasta tanto el médico tratante estableciera los servicios que necesita.

No obstante, estimó que, al margen de que no existiera una orden médica que sugiriera un tratamiento específico, no era razón para negar la prestación, en tanto que, en el marco del derecho fundamental a la salud en su faceta de diagnóstico, supone que al paciente se le deben brindar todos los servicios que contribuyan al mejoramiento de su salud, mas aún cuando, en este caso, por las patologías que presenta el paciente, hace que sea considerado una persona de especial protección.

Con apoyo en lo anterior, concedió el amparo ordenando a la EPS accionada efectuar un comité interdisciplinario en las especialidades médicas que consideren pertinentes, para que valoren las condiciones médicas del paciente y determinen la necesidad y pertinencia de autorizar el medicamento reclamado en la acción de tutela.

También ordenó el tratamiento integral para que la EPS accionada suministre al paciente todos los servicios de salud, medicamentos, insumos, autorizaciones que entreguen los médicos tratantes para tratar las patologías, que lo aquejan.

3. LA IMPUGNACIÓN

En tiempo, la EPS CAPITAL SALUD impugnó el fallo de primer grado, en cuanto a la orden contenida en el ordinal tercero, atañedora al tratamiento integral, por constituir un hecho futuro e incierto, que deja puerta abierta para que se autoricen tratamientos, insumos o procedimientos experimentales o alternativos que van en detrimento de los recursos del SGSSS y en contravía de los principios rectores del SGSSS, cerrando la posibilidad de generar una defensa posterior, y extralimitando las funciones del juez constitucional.

Solicito revocar el ordinal tercero del fallo impugnado.

4. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la impugnación orbita solo en el numeral 3° del fallo de tutela, esto es; respecto al tratamiento integral esta judicatura se centrara únicamente en este aspecto, considerando que tanto la accionante y accionado guardaron silencio respecto a las demás ordenes impartida en el referido fallo.

El juzgado de primera instancia consideró pertinente ordenar el tratamiento integral, atendiendo la particular condición de salud del agenciado, decisión cuestionada por la EPS accionada, al considerar que ha garantizado la prestación de los servicios médicos, y que no hay lugar a ordenar la prestación de servicios futuros e inciertos, en tanto, ello podría representar una afectación del sistema general de seguridad social en salud.

Probado se encuentra en el plenario que el agenciado es un paciente diagnosticado con VIH y HEPATITIS C, y que dadas sus patologías, puntualmente la primera, hace que sea considerado un sujeto de especial protección por parte del Estado, lo que comporta, que ha de dispensarse garantías para el goce efectivo de sus derechos en condiciones dignas, en caminadas a propender por el mejoramiento de las condiciones de salud, del agenciado, hasta donde ello sea posible.

Reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puesto de presente la prevalencia del derecho fundamental a la salud y especial protección, cuando se trata de personas con cáncer o portadores del VIH; en ese sentido ha dicho:

“...Particularmente, las personas que padecen de VIH/SIDA se hacen merecedoras de una “protección constitucional reforzada” Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección integral a las personas afectadas, debido a que es una enfermedad catastrófica que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de quienes la padecen, incrementando el riesgo de muerte de los pacientes cuando no reciben el tratamiento adecuado de forma oportuna.¹ (Subrayado fuera de texto)

De la misma manera ha indicado que el principio de integralidad obliga a que las entidades del sistema de salud presten a los pacientes toda la atención necesaria, sin que haya que acudir con tal objeto, al ejercicio de acciones legales de manera reiterada y prolongada en el tiempo.

En Sentencia T-289 de 2013, la Corte Constitucional determinó que: “*el juez de tutela estaba obligado a ordenar el suministro de los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, ello con la finalidad de que las personas afectadas por la falta del servicio, obtengan continuidad en la prestación del mismo. La Corte ha indicado que con ello se evita la interposición de acciones de tutela por cada servicio que le sea prescrito a un afiliado por una misma patología*”²

Puntualmente sobre la categorización de los pacientes enfermos de sida como sujetos de especial protección y la atención que a ellos debe dispensarse, la Corte Constitucional, en sentencia T-330 de 2014, indicó:

“Tratándose de personas que sufren el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), o se encuentran en la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), por disposición constitucional y desarrollo legal, su derecho a acceder a los servicios de salud requeridos se protege de forma especial. El tratamiento médico del VIH tiene las características (i) de ser de alto costo y (ii) permanente. De esas características nacen dos derechos para los usuarios contagiados con dicho virus: (a) el derecho a acceder a todos los servicios que requieran, estén o no contemplados en el POS, y sin que el factor económico sea en ningún caso un obstáculo para ello, y (b) los servicios de salud para las personas contagiadas por el VIH deben ser suministrados de forma continua y permanente por tratarse de una enfermedad catastrófica y progresiva, que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de las personas que la padecen, por lo que el eventual riesgo de muerte se

¹ Sentencia T-262 de 2005.

² En la sentencia T-091 de 2011, la Sala Novena de Revisión advirtió que la prestación del servicio en salud debe ser oportuna cuando la persona la recibe en el momento que corresponde para recuperar su salud sin sufrir mayores dolores y deterioros

incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado de forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección integral a las personas afectadas (subrayas propias).

En esa línea, frente a la obligación de dispensar protección integral para pacientes enfermos de sida, en la misma sentencia la Corte, precisó:

“La obligación de brindar el tratamiento integral radica en que la infección por VIH/SIDA es catastrófica, evolutiva y mortal, pues “destruye en forma gradual el sistema inmunológico del organismo dejándolo desprotegido” y, por lo tanto, exige un tratamiento médico “que no se agota en el tiempo”, es decir, que debe ser permanente y constante, “de acuerdo con el estado de salud del paciente y con sus requerimientos médicos y clínicos”.

La Corte ha hecho énfasis en que “el tratamiento incompleto [...] u opuesto a las recomendaciones médicas”, agrava la situación de indefensión y el estado de salud de quien padece el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, de donde se desprende que el tratamiento iniciado no puede suspenderse, pues la prestación del servicio de salud debe ser eficaz y, por lo mismo, continua y fundada en la buena fe, ya que cuando no se brinda todo el tratamiento se incurre en una especie de actividad experimental que afecta la dignidad de la persona”

El juzgado de primera instancia otorgó el tratamiento integral encaminado a que la EPS accionada suministre al paciente todos los servicios de salud, medicamentos, insumos, autorizaciones que entreguen o expidan los médicos tratantes para tratar las patologías que lo aquejan, es decir, concedió el tratamiento integral, atado a la prescripción que determinen los médicos tratantes frente a las patologías que padece el agenciado, todo lo cual, permite establecer que la orden impartida por el juzgado accionado en el caso concreto delimita el ámbito que ha de aplicarse, amén de que luce ajustada a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional respecto de pacientes enfermos de sida, por lo que no se revocará el ordinal cuestionado.

5. CONCLUSIÓN

En estas condiciones, se confirmará la sentencia impugnada, pues, en casos como el que aquí se ha puesto de presente, compete a la entidad promotora de salud, brindar **oportuna e integralmente** la asistencia que requiera el paciente.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. CONFIRMAR, por los motivos señalados la sentencia impugnada.

6.2. NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

T-061-2023-00473-01

Ysl